



Sección especial: AGUA

1 NUEVAS ACTIVIDADES DEL BID EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

2 OPERACIONES Y ACTIVIDADES AMBIENTALES EN 2003

Nuevas operaciones ambientales

Trabajo con el sector privado

Trabajo con la pequeña y mediana empresa

Fortalecimiento de las capacidades ambientales en la región

Cómo asegurar la calidad ambiental de los proyectos

3 Sección especial: AGUA

Agua potable y saneamiento: temas y retos

Acciones del Banco en recursos hídricos

Recuadros

- Recuadro 1. Cómo aumentar los beneficios económicos, sociales y ambientales del sector forestal
- Recuadro 2. Cómo lograr que la pequeña empresa tenga mayor acceso a los sistemas de gestión ambiental
- Recuadro 3. Cómo restaurar el centro de una ciudad
- Recuadro 4. Cómo anticipar los impactos de una propuesta vial
- Recuadro 5. La desalinización como medio para incrementar el abastecimiento de agua
- Recuadro 6. Prácticas de responsabilidad social empresarial a la medida de la pequeña y mediana empresa
- Recuadro 7. Financiamiento de inversiones en agua potable y saneamiento para los pobres en áreas rurales
- Recuadro 8. Manejo de cuencas y gobernabilidad hídrica



Nuevas actividades del BID

en el área de medio ambiente



El suceso más significativo en el campo del medio ambiente en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante 2003 fue la adopción en junio de su nueva Estrategia de Medio Ambiente. Elaborada en un período de seis meses, esta nueva estrategia es la consecuencia natural del énfasis que la comunidad internacional le dió a la pobreza y el medio ambiente durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible realizada en septiembre de 2002. Por ello parte de reconocer que la calidad del medio ambiente y de la base de recursos naturales constituye el capital natural que sostiene el crecimiento económico y la competitividad en el largo plazo, a la vez que contribuye a reducir la pobreza y a mejorar el bienestar. De ahí que la estrategia aplique a todas las actividades financieras y no financieras del Banco y no sólo a aquellos proyectos que tradicionalmente se han concebido como “ambientales”.

El objetivo fundamental de la estrategia es lograr que el apoyo que el Banco brinda a los países en materia ambiental sea más efectivo. Asimismo pretende insertar la dimensión del medio ambiente en los objetivos amplios del desarrollo de una manera equilibrada y armonizada a través de todos los sectores, para lo cual se enfoca en la gobernabilidad y en los marcos de política y de incentivos que afectan la gestión del entorno y los recursos naturales.

Dentro de este contexto amplio, la Estrategia de Medio Ambiente busca:

- establecer un marco general para la acción del Banco que concuerde con los nuevos modelos, retos y oportunidades del desarrollo,
- poner en marcha los principios de la

Estrategia Institucional del Banco e internalizar plenamente la sostenibilidad ambiental como meta subyacente, e

- identificar directrices y acciones prioritarias que hagan más efectivos el trabajo y los procedimientos del Banco.

El Banco ha identificado dos áreas fundamentales que ayudarán a abordar transversalmente las principales causas de los problemas ambientales en la región:

- gobernabilidad ambiental, y
- mejor integración de las políticas y desarrollo de un marco adecuado de incentivos.

En su sentido más amplio, el término gobernabilidad ambiental se refiere a un proceso que vincula y armoniza políticas, instituciones, procedimientos, herramientas e información para permitir que los distintos grupos de interés —sectores público y privado, ONG, comunidades— participen en la toma de decisiones, en el manejo de conflictos y en la búsqueda de consensos, y al mismo tiempo rindan cuentas de sus acciones. Se basa en claras responsabilidades públicas y privadas, en el respeto y cumplimiento de la ley, y en la potenciación de las comunidades.

La búsqueda de una mejor integración de las políticas y el desarrollo de un marco adecuado de incentivos de gestión





ambiental coloca a las actividades ambientales en el centro mismo de todas las esferas de la toma de decisiones en materia de políticas, y particularmente de aquellas que son críticas para avanzar en la agenda de las cuatro áreas prioritarias de la Estrategia Institucional del Banco: modernización del Estado, competitividad, desarrollo social e integración económica.

Existen vínculos directos entre la Estrategia de Medio Ambiente y los dos objetivos rectores de la Estrategia Institucional del Banco, a saber, reducción de la pobreza y promoción de la equidad social, y crecimiento económico sostenible. La contribución de la dimensión ambiental al logro de estas dos metas se insertará en las cuatro áreas prioritarias de la siguiente manera:

Gobernabilidad ambiental y modernización del Estado: A través de los programas del Banco se buscará desarrollar y consolidar un marco de gestión ambiental que sea transparente y participativo, y que conduzca al establecimiento de las prioridades adecuadas en materia de calidad ambiental y gestión sostenible del capital natural. Entre las áreas claves figuran:

- fortalecimiento de las instituciones y participación de la sociedad civil,
- fortalecimiento del marco normativo, y
- desarrollo de conjuntos de instrumentos ambientales efectivos.

Medio ambiente y competitividad: Los programas del Banco buscarán preservar y mejorar la calidad y el tamaño de la base de recursos naturales, dado que el capital natural debe complementar el desarrollo humano, el capital financiero y el físico, en aras de lograr las metas de competitividad y crecimiento económico sostenible. Entre las

áreas claves figuran:

- incrementar el valor productivo de los recursos naturales y de sus funciones y servicios ambientales,
- facilitar las inversiones y el desarrollo de mercados, y promover la participación del sector privado en las actividades relacionadas con el medio ambiente, y
- aprovechar los mercados ambientales globales y regionales.

Medio ambiente y desarrollo social:

A través de los programas del Banco se contribuirá a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, en la medida en que reconoce que las inversiones en mejoras ambientales y en los recursos naturales producen fuentes de empleo, ingresos sostenibles y mejores condiciones de vida. Entre las áreas claves figuran:

- salud y medio ambiente,
- desarrollo rural y recursos naturales,
- usos culturales y tradicionales de los recursos naturales en las comunidades indígenas, y
- vulnerabilidad física a desastres naturales y riesgos ambientales.

Medio ambiente e integración económica:

A través de los programas del Banco se promoverá la integración económica regional en el marco de un manejo ambiental de carácter regional, dado que América Latina y el Caribe necesitan estar bien posicionadas en la economía global y ser capaces de capitalizar aquellas oportunidades ofrecidas por el comercio y la apertura de los mercados. Entre las áreas claves figuran:

- instituciones ambientales y marcos normativos,
- manejo de bienes y servicios ambientales, y



- calidad ambiental de las iniciativas de infraestructura.

Al fijar sus prioridades para brindar apoyo en un país particular, el Banco también tiene en cuenta específicamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados por los 189 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio del año 2000. Dentro de cada Estrategia de País se considerará la manera de ayudar a los gobiernos a cumplir con sus compromisos relativos a las tres metas ambientales contenidas en los ODM:

- revertir la pérdida, desperdicio y degradación de los recursos naturales,
- mejorar el acceso a fuentes seguras de agua potable, y
- mejorar las condiciones de vida en las áreas marginales.

La puesta en marcha de la Estrategia de Medio Ambiente implica emprender distintas acciones en las diversas etapas de las actividades del Banco. En la fase de programación, por ejemplo, el análisis ambiental que se haga de un país será incorporado en las etapas tempranas de la elaboración de la estrategia

nacional. Durante el diseño de las operaciones se prepararán estudios sobre buenas prácticas y lineamientos para evaluaciones ambientales estratégicas (SEA por sus siglas en inglés) relacionadas con grandes proyectos de infraestructura y reformas sectoriales. Durante la fase de ejecución y supervisión se diseñarán indicadores ambientales de referencia y desempeño. Asimismo, en las Oficinas de País se fortalecerá la capacidad de supervisar y vigilar tales indicadores.

A medida que se llevan a cabo estas acciones prioritarias se realizará paralelamente la evaluación y supervisión de la Estrategia de Medio Ambiente en su totalidad. Para ello se emplearán tres indicadores de desempeño: indicadores de productos, como son el número de préstamos o la cantidad de asistencia técnica ofrecida; indicadores de resultados, como el grado en el cual los países han establecido y hecho cumplir en forma efectiva las normas ambientales; e indicadores de impacto, como la contribución de los proyectos al alivio de la pobreza o al mejoramiento de las condiciones para el crecimiento económico.

Indicadores seleccionados de problemas ambientales en América Latina y el Caribe

- Durante la década de los años noventa la región perdió anualmente cerca de 4,7 millones de hectáreas de bosques. Las pérdidas más grandes ocurrieron en Brasil, pero las tasas anuales de pérdidas más elevadas se presentaron en Nicaragua y El Salvador.
- El sector del transporte es responsable en buena parte del deterioro de la calidad del aire que afecta a las grandes ciudades de la región. Hay más de 100 millones de personas expuestas a niveles de contaminación atmosférica que exceden los límites recomendados por la OMS.
- Las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de muerte en América Latina. Más de la mitad de esas muertes corresponde a niños menores de cinco años.
- Cerca del 15% de la población carece de acceso a un suministro de agua seguro, mientras que en las áreas rurales esa proporción se puede elevar hasta un 30%. Menos de la mitad de la gente cuenta con acceso a servicios de alcantarillado convencionales, y un tercio de la población tiene que valerse de letrinas y pozos sépticos para la disposición de desechos.





Durante 2003, los préstamos ambientales se mantuvieron en el mismo nivel de los dos años anteriores: US\$402 millones (Gráfico 1). Pero esta cifra debe ser vista en el contexto de la actividad crediticia general del Banco, que ascendió a US\$6.800 millones. Por décimo

año consecutivo el BID fue la principal fuente de financiación multilateral para la región. Como proporción de los préstamos totales del BID, los asignados a las actividades ambientales disminuyeron del 8,2 al 5,9% (Gráfico 2).

Sin embargo, se presentaron dos hechos que señalan un nuevo momentum en el nivel de actividad en los años venideros. Primero, se aprobó un elevado volumen de donaciones provenientes de cooperaciones técnicas (CT) para actividades ambientales en 2003, el cual ascendió a US\$19,2 millones, representando un aumento del 10% con respecto al año anterior (Gráfico 3). Una buena parte de esta financiación facilita la preparación de préstamos y muy probablemente impulsará la actividad crediticia ambiental durante los próximos años.

Segundo, los préstamos ambientales que se encuentran actualmente en preparación, es decir, programados para ser aprobados en 2004 y 2005, suman US\$2.100 millones. Esto indica una gran demanda de acciones en la región, así como un nivel de esfuerzo muy significativo por parte del Banco para suministrar los fon-

Gráfico 1

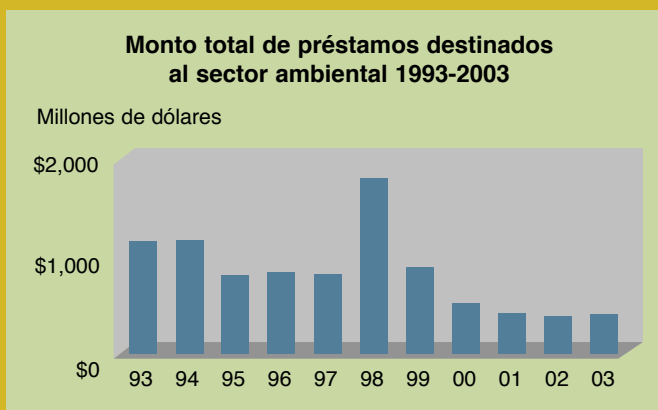


Gráfico 2

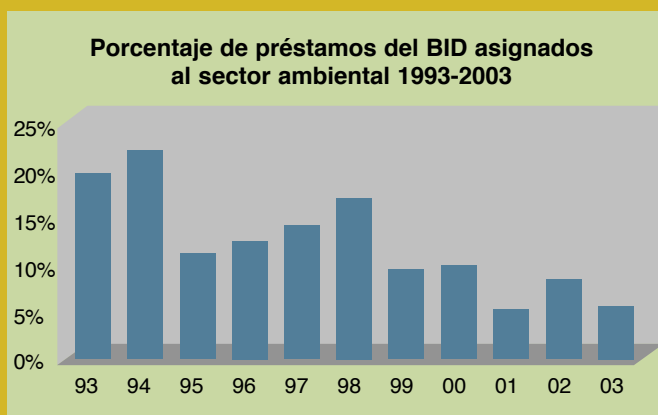


Gráfico 3



dos requeridos. Más del 80% del monto total de los préstamos en preparación corresponde a grandes obras de agua y saneamiento, lo cual señala las prioridades de la región en el sector hídrico (véase la *Sección Especial: Agua*).

NUEVAS OPERACIONES AMBIENTALES

En 2003, el Banco aprobó 11 préstamos ambientales por un total cercano a US\$402,4 millones (este monto no incluye los créditos para agricultura, los cuales ascendieron a US\$62,8 millones). Estos préstamos están distribuidos en cuatro grandes categorías (Gráfico 4):

- Agua y saneamiento (US\$157 millones, 39%);
- Manejo sostenible de recursos naturales (US\$114 millones, 28%);
- Proyectos de gestión ambiental urbana (US\$100 millones, 25%); y
- Regularización y gestión de tierras (US\$31 millones, 8%).

Durante 2003 también se aprobaron 59 donaciones vía cooperaciones técnicas ambientales por un monto total de US\$19,2 millones (esta suma no incluye las cooperaciones técnicas asignadas

a agricultura, las cuales ascendieron a US\$5,4 millones). Los recursos se destinaron a las siguientes áreas (Gráfico 5):

- Manejo sostenible de recursos naturales (US\$6,10 millones, 32%);
- Eficiencia energética y producción limpia (US\$5,65 millones, 29%);
- Agua y saneamiento (US\$2,86 millones, 15%);
- Gestión ambiental urbana (US\$2,13 millones, 11%);
- Marcos estratégicos y evaluaciones ambientales (US\$1,93 millones, 10%); y
- Gestión de riesgos ambientales y reducción de vulnerabilidad (US\$587.000, 3%).

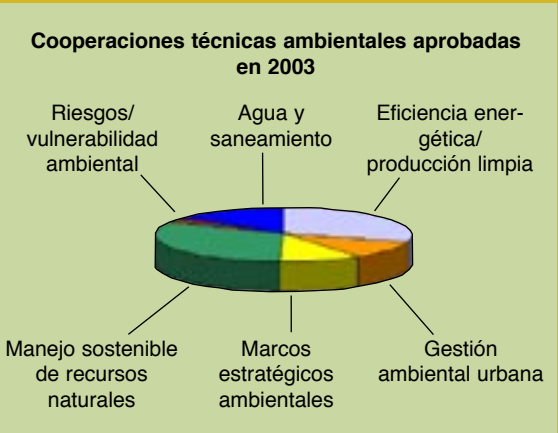
La lista completa de préstamos y cooperaciones técnicas se encuentra en www.iadb.org/eis.

En este apartado se describen las actividades realizadas en muchas de estas áreas y se incluyen algunos perfiles de proyectos específicos. Dado que los recursos hídricos y el saneamiento constituyen el tema de la *Sección Especial: Agua* de este Informe Anual, aquí se presenta sólo un breve resumen de las actividades realizadas en ese sector.

Gráfico 4



Gráfico 5





Reducir las brechas en los servicios de agua y saneamiento

Durante 2003, el Banco aprobó tres préstamos en este sector en Brasil, Chile y Guatemala, por un total de US\$157 millones. Esta es la categoría más grande en cuanto a montos de préstamos ambientales. Las inversiones se destinan a aumentar la disponibilidad de agua potable y saneamiento tanto en áreas urbanas como rurales. El Banco también aprobó 13 operaciones de cooperación técnica en Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Perú por un monto total cercano a US\$2,9 millones. La mayor parte de estas actividades está dirigida a preparar operaciones para los dos próximos años y para fortalecer los marcos institucionales, legales y normativos.

Proteger la base de recursos naturales para garantizar la prosperidad económica

Un elemento constante de la agenda ambiental del BID ha sido la protección de los recursos naturales que sostienen el desarrollo económico y social. A través de los años, el Banco ha participado en numerosas actividades que se sustentan en motores económicos —bosques y pesquerías, industria, turismo, etc.— para lograr objetivos económicos regionales y sostenibilidad ambiental. En todos estos casos, la meta subyacente es el mejoramiento del potencial económico y la reducción de vulnerabilidades ambientales, económicas y físicas. En 2003, el Banco aprobó operaciones en varias áreas relacionadas con ecosistemas marinos y terrestres. Se aprobaron nuevos préstamos por US\$114 millones, y cerca de US \$6,1 millones en cooperaciones técnicas.

En el área de turismo sostenible, el Banco aprobó dos préstamos por un total de US\$44,6 millones: uno para desarrollo integrado de turismo en Salta, Argentina, y otro para turismo comunitario en Chiloé y Palena, Chile. Estas iniciativas ligan la base de recursos naturales con el patrimonio cultural y el desarrollo comunitario. Asimismo se aprobaron cuatro CT por más de US\$3,4 millones para operaciones de turismo. La mayor parte de estos recursos —US\$3 millones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)— se destinaron a cooperaciones técnicas regionales dirigidas a establecer sistemas de acreditación y certificación para proveedores de servicios turísticos, con el fin de que mejoren su competitividad y el acceso a nuevos mercados. Igualmente se asignaron recursos no reembolsables para turismo sostenible en Nicaragua, Belice y la región andina. En este último, el proyecto se centra en promover los activos ambientales y el patrimonio cultural y arqueológico que se encuentran a lo largo de la Ruta Inca, que abarca cinco países de América del Sur.

En el área de manejo forestal, protección de bosques y biodiversidad, las nuevas actividades crediticias se circunscribieron a una operación en América Central, una región donde los suelos están sometidos a enormes presiones y cuyas tasas de deforestación figuran entre las más elevadas del mundo. La nueva operación aprobada para Honduras (Recuadro 1) responde a la necesidad de mejorar la productividad y el valor de conservación de una vasta extensión de tierras con vocación forestal. Asimismo se aprobaron algunas cooperaciones técnicas pequeñas para apoyar los esfuerzos de manejo sostenible de bosques, también



en ese país. Por último se adjudicó una cooperación técnica regional para analizar las oportunidades que existen en Centroamérica para la inversión directa en empresas de carácter forestal.

El Banco continúa sus esfuerzos en favor de las iniciativas de gestión costera que avanzan a partir de los programas diseñados y ejecutados en años anteriores. En Centroamérica, el BID aprobó en 2003 una nueva cooperación técnica para respaldar el desarrollo de un programa nacional de manejo del litoral en Panamá.

La protección de los recursos hídricos sigue siendo una de las principales prioridades del Banco en la región. Hacia fines de la década de los años noventa se comienza a percibir un cambio de paradigma, pasándose de una situación caracterizada por el manejo centralizado de proyectos sectoriales de desarrollo de

recursos hídricos, hacia otra caracterizada por la gestión integrada de los recursos, donde la unidad de planificación para la gestión pasa a ser la cuenca hidrográfica. Así pues, tal como se señala en la *Sección Especial: Agua*, la protección y la gestión de cuencas se ha convertido en uno de los pilares de la cartera del Banco, con más de 25 proyectos aprobados desde 1989 y una cantidad significativa de operaciones nuevas en vías de preparación. Estas nuevas inversiones se centran en proteger la base de recursos naturales, al tiempo que se proponen mejorar los medios de subsistencia y los ingresos de los pobladores. Para garantizar que estas actividades sean sostenibles se está propiciando la participación activa de la comunidad en las etapas de diseño y ejecución.

El Banco también se ha concentrado en incorporar el manejo ambiental en

Recuadro 1. Cómo aumentar los beneficios económicos, sociales y ambientales del sector forestal

En Honduras, al aprovechamiento forestal contribuye de manera significativa al ingreso nacional. En los años noventa llegó a representar un 10% del PIB. Con todo, su potencial se encuentra limitado por varios factores, entre los cuales figuran la inseguridad de la tenencia de la tierra y la existencia de un marco jurídico e institucional que no responde a los requerimientos del sector. Más de tres cuartas partes de la tierra en Honduras se clasifica como propiedad pública y se encuentra ocupada principalmente por individuos o comunidades que no poseen escrituras formales. Esto impide que la gente ejerza control sobre los recursos forestales, invierta en su protección o en aumentar su productividad, y establezca vínculos contractuales. Tal situación los induce más bien a talar los árboles y a vender la madera ilegalmente, lo que en algunas regiones ha desencadenado problemas de orden público.

Con un préstamo de US\$17,5 millones a 40 años aprobado para Honduras en 2003, el programa multifase Pro-Bosque abordará algunas de las limitaciones que afectan la actividad forestal comercial y promoverá mejores prácticas de manejo de bosques. Inicialmente se centrará en 625.000 hectáreas en cuatro áreas prioritarias: tres regiones de pinares y una región de bosque de frondosas. El programa utilizará las asociaciones de municipalidades existentes u otras instituciones locales o regionales para llevar a cabo sus actividades. Entre otras cosas, la iniciativa financiará procesos de regularización de la tenencia de la tierra, lanzará una propuesta para fortalecer la vigilancia y el control de la tala ilegal, y apoyará la reorganización de la Administración Forestal del Estado para que ejerza como agencia reguladora.

Mediante el fortalecimiento de la productividad del sector forestal y de la sostenibilidad de la industria local que en ella se sustenta, el programa Pro-Bosque tendrá beneficios medibles para las empresas forestales pequeñas y medianas, las asociaciones de productores, los gobiernos locales y las familias rurales que viven en la pobreza en las áreas de bosques. Se espera que esta iniciativa ofrezca nuevas oportunidades para que grupos familiares, comunidades y asociaciones desarrollen microempresas y establezca vínculos con el mercado a través de la integración. En la medida en que ayudará a prevenir la tala ilegal, este programa contribuirá a reducir la deforestación y a mejorar la condición de las cuencas hidrográficas.



los programas de modernización industrial. Para aumentar la competitividad de un sector determinado se requieren nuevos diseños institucionales y un sólido marco normativo ambiental. Tal enfoque ha sido adoptado en un programa recientemente aprobado de apoyo a la modernización productiva de la provincia de Río Negro, Argentina, en el cual se introdujo un componente que busca fortalecer el Consejo de Ecología y Medio Ambiente. Esto ha contribuido a que la agencia se reforme e introduzca nuevos procedimientos para administrar el fondo provincial de gestión ambiental, nuevas técnicas de manejo ambiental, mejoras en la metodología de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y en los sistemas de evaluación y supervisión, así como un nuevo modelo para el manejo de áreas naturales protegidas.

El Banco continúa respaldando la inclusión de actividades de conservación de recursos naturales en los programas de integración regional, para lo cual se aprobaron varias cooperaciones técnicas en el curso del año. Una de ellas es para que los países andinos formulen una estrategia de biodiversidad para su región. En materia de comercio y desarrollo se aprobaron dos CT no reembolsables para mejorar las capacidades institucionales de las agencias de medio ambiente nacionales y regionales, así como sus respuestas tanto a los nexos entre comercio y medio ambiente como a los retos que esta nueva agenda plantea. Una de ellas apunta a fortalecer el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) en Nicaragua, para lo cual se brindará ayuda al gobierno para que aborde tanto las dificultades como las oportunidades ambientales relacionadas con el comercio. Asimismo se le suministrará apoyo

para realizar análisis de los acuerdos comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLC Centroamérica). La otra operación se centra en los retos ambientales a los que se enfrenta esta región en relación con la integración económica y los acuerdos de libre comercio como parte de la Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sostenible (IMDS). Lo anterior está relacionado con el Plan Puebla-Panamá (PPP) apoyado por el Banco.

El PPP ha sido adoptado por México y todos los países centroamericanos como un marco programático transversal que asegure que todos los proyectos, programas e iniciativas incorporen una gestión ambiental adecuada y promuevan la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. La IMDS se propone:

- ayudar a crear las condiciones para un desarrollo sostenible regional;
- promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales con el fin de elevar su valor económico;
- proteger la riqueza de la biodiversidad;
- garantizar mecanismos de gestión participativos, particularmente en lo que tiene que ver con las comunidades locales e indígenas;
- Promover el desarrollo sostenible en otras iniciativas del PPP, y
- Armonizar las diferentes normas de gestión ambiental.

Un hito que marca a la IMDS es el Memorando de Entendimiento firmado por los Ministros de Medio Ambiente de la región centroamericana y los comisionados del PPP el 2 de junio de 2003, en lo cual el Banco desempeñó una función facilitadora. Mediante la firma de este memorando, la Comisión Ejecutiva del PPP, los Ministros de la



Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) asumen la responsabilidad de impulsar la IMDS y de garantizar que los países adopten en forma apropiada estas prioridades regionales, teniendo en cuenta las capacidades financieras de cada cual. La IMDS adopta el concepto de desarrollo sostenible tal y como quedó expresado en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. La iniciativa está ligada a esfuerzos claves de gestión ambiental en Centroamérica como es el Programa Regional Mesoamericano de Gestión Ambiental, y a la vez promueve activamente la aplicación de evaluaciones ambientales estratégicas con el fin de estimar los impactos regionales y transfronterizos de las iniciativas contenidas en el PPP.

Aumentar la competitividad: eficiencia energética, producción limpia y responsabilidad empresarial

Durante 2003 el Banco aprobó CT por un monto de US\$5,65 millones para fortalecer la competitividad de América Latina y el Caribe a través de un mejor desempeño económico y ambiental de sus industrias, de la adopción de enfoques de responsabilidad social empresarial (RSE) por parte de las empresas y del mejoramiento de los beneficios ambientales locales y globales.

Con financiación del FOMIN, el Banco suministró asistencia focalizada para proyectos relacionados con gestión ambiental y producción más limpia en Costa Rica (Recuadro 2), México y Nicaragua. Éstos emplean los conceptos de prevención de la contaminación

Recuadro 2. Cómo lograr que la pequeña empresa tenga mayor acceso a los sistemas de gestión ambiental

Las compañías pequeñas que quieren cumplir con todas las normas de gestión ambiental especificadas en ISO 14001 expedidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) enfrentan enormes presiones para preservar su competitividad. Varios países de la región han desarrollado normas ISO 14001 simplificadas que se adaptan mejor a la pequeña y mediana empresa (Pyme).

En Costa Rica, con una CT por US\$461.000 aprobada en 2003, el Centro Nacional de Producción Más Limpia, el Ministerio del Ambiente y Energía y la Cámara de Industrias están trabajando mancomunadamente para facilitar el acceso de las Pyme a los sistemas de gestión ambiental (70% de los miembros de la Cámara de Industrias son Pyme). Una de las innovaciones importantes del proyecto es la cooperación entre el regulador y los regulados.

Otro aspecto significativo es que el proyecto operará con todas las cadenas de producción y no con una industria o compañía específicas. En cada uno de los tres sectores productivos —productos agrícolas procesados, productos alimenticios y servicios— se incluirán 10 Pyme con nexos cliente-proveedor comprobados. Estas 30 compañías recibirán asistencia técnica por parte de consultores contratados para cada sector, y al final de los tres años habrán desarrollado tres manuales sobre producción más limpia. Para ello se realizarán por lo menos 16 talleres sobre temas como reciclaje de aguas, normas ambientales para efluentes y acuerdos voluntarios de producción más limpia. Asimismo se diseñará un sitio Internet para el proyecto, con el fin de que se tome conciencia sobre estos temas y se difundan los resultados de la iniciativa a medida que se van produciendo.

Entre los beneficios que se esperan del proyecto —más allá de la capacitación y asistencia que se dará a las 30 empresas, 30 administradores ambientales y por lo menos a 60 empleados de las Pyme— figura la elaboración de un marco normativo más sólido que ayude a fortalecer el Plan de Desarrollo Nacional de Costa Rica dentro de un marco de sostenibilidad. Además, el sector privado tendrá reglas más claras que él mismo ha ayudado a diseñar, lo cual a su vez inducirá a las compañías a invertir con más confianza. Se espera que los sistemas de producción más limpia a ser introducidos logren reducir los desechos, emisiones y efluentes en un 10% en promedio, mientras generan ahorros en energía y uso de materiales.



y similares como herramientas para reducir los insumos industriales. Esto conlleva un doble beneficio: mejorar las ganancias de las compañías, al tiempo que minimiza el impacto ambiental de las industrias. El desempeño ambiental se ha convertido en un asunto clave para muchas industrias de la región, inclusive para aquellas compañías pequeñas y medianas que se encuentran en vías de expansión y de conquistar nuevos mercados y consumidores nacionales y regionales, como resultado de las negociaciones comerciales recientes. Muchos de estos proyectos tienen que ver con innovaciones que producirán un efecto positivo en el futuro desarrollo de la industria y en su relación con el entorno natural y social de la región.

La responsabilidad social empresarial es un enfoque empresarial que asume el respeto por la ética, los individuos, las comunidades y el medio ambiente como estrategia corporativa integral para agregarle valor a la firma. Su impacto positivo es doble: contribuye a aumentar la competitividad de la empresa y al mismo tiempo ayuda a aliviar los problemas sociales y ambientales. Este enfoque está recibiendo un apoyo cada vez mayor por parte del Banco. Mientras que la RSC se encuentra todavía en su etapa inicial en esta región, la presión que se está ejerciendo en las compañías para que incorporen estos conceptos está aumentando rápidamente, en parte como respuesta al proyecto de Pacto Global lanzado por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 1999. El Banco aprobó dos proyectos relacionados con la RSC en 2003 con financiación del FOMIN. Uno de ellos se centra en promover el concepto de RSC en toda la región, mientras que el otro pretende que se implementen medidas

de RSC en las empresas pequeñas y medianas de Chile (véase más adelante en este informe).

Durante 2003, el Banco también puso en marcha un nuevo programa de actividades de cooperación técnica diseñado para fortalecer los nexos entre la mitigación de gases con efecto de invernadero (GHG por sus siglas en inglés) y un mayor desarrollo en la región. Actualmente se está realizando un diagnóstico regional que identificará las oportunidades que existen para disminuir los GHG mientras se aumenta la eficiencia energética, se reducen costos y se obtienen otros beneficios sociales. Un ejemplo en este sentido tiene que ver con el transporte público en las ciudades más grandes, un sector en el que tanto los enfoques institucionales como la infraestructura están cambiando. Otros ejemplos a tener en cuenta son el manejo correcto de las emisiones de metano provenientes de los rellenos sanitarios, un mayor almacenamiento de dióxido de carbono en áreas de bosque más extensas, y un uso más generalizado de energías renovables. Aun más, es posible que algunas de las opciones efectivas en función de los costos que se mencionan aquí para lograr una mitigación de GHG cree simultáneamente nuevas oportunidades para participar en el naciente mercado internacional de créditos de GHG.

La Política de Energía del Banco, que actualmente se está reformulando y cuya versión final se espera para principios de 2004, hace especial énfasis en crear las condiciones que faciliten el desarrollo de energías limpias y las salvaguardas ambientales para el desarrollo de fuentes de energía convencional. Se espera que esta nueva política impulse una expansión de aquellas opciones



de energía limpia que sean efectivas en función de los costos.

Apoyo a la capacidad de gestión ambiental urbana para mejorar las condiciones de vida de las comunidades

Una característica predominante que subyace a esta área de intervención es la promoción de iniciativas de responsabilidad compartida en las que gobiernos locales, comunidades y el sector privado participan activamente en el diseño y ejecución de proyectos ambientales. Las áreas objetivo de estas acciones son los centros urbanos —tantos en áreas metropolitanas como en ciudades intermedias— que exhiben una alta concentración de actividad económica, una

elevada demanda de infraestructura y servicios, y niveles cada vez mayores de deterioro ambiental. Se incluye igualmente la promoción de un paquete adecuado de incentivos económicos, financieros y técnicos que permitan lograr la sostenibilidad de largo plazo de las ciudades y fortalecer las capacidades institucionales de los municipios

El Banco aprobó este año una operación de préstamo por más de US\$100 millones para la ciudad de São Paulo, Brasil (Recuadro 3). A través de este programa se aborda una variedad de temas ambientales que afectan la vida en el centro de la ciudad, desde una mejor calidad del aire por medio del uso de mejores sistemas públicos y privados de transporte, hasta programas

Recuadro 3. Cómo restaurar el centro de una ciudad

La calidad ambiental del centro de São Paulo, Brasil, se encuentra gravemente deteriorada a causa de la presión que ejercen la población, la industria y el comercio. La calidad del aire es deficiente debido a las emisiones de más de 600.000 vehículos privados que transportan hacia y desde el centro a un millón de personas cada día. El viejo sistema de drenaje no resiste el aumento de la escorrentía de aguas lluvias que se produce en parte por la pavimentación. Los vendedores ambulantes producen cantidades excesivas de basura, y sus puestos bloquean las barredoras que tratan de retirar los desechos. El mantenimiento general adolece de deficiencias de planificación y manejo, y no se cuenta con personal calificado para realizarlo.

En respuesta a estas y otras preocupaciones se estableció el programa PROCENTRO con la ayuda de un préstamo del BID por algo más de US\$100 millones. Hasta entonces el Banco no había financiado un préstamo de renovación urbana integrada, aunque sus componentes sí le son familiares. Además de apoyar el fortalecimiento institucional del municipio, a través de esta iniciativa se costearán varios componentes de la estrategia de la ciudad para mejorar la eficiencia y la calidad de la vida de quienes habitan y trabajan en su centro. Entre los planes para restaurar el entorno urbano figuran la mejora del espacio público, la reparación de monumentos y edificios dilapidados, la construcción de canales de aguas lluvias y estanques de contención de inundaciones, y el mejoramiento del manejo de desechos sólidos. PROCENTRO también centrará sus esfuerzos en mejorar el transporte y la circulación, por ejemplo mediante la reducción del número de autobuses que transitan en el centro de la ciudad y de la construcción de infraestructura para líneas radiales de transporte público. El gobierno no solamente le pedirá a la gente que se reestablezca en el viejo centro de la ciudad sino que él mismo lo hará. Las agencias municipales se mudarán allí, para lo cual PROCENTRO apoyará la financiación necesaria que permita rehabilitar los edificios, así como la compra e instalación de equipamientos.

Cabe destacar igualmente el enfoque adoptado por PROCENTRO, en el cual sus prioridades son el resultado de un diálogo en el que participan los múltiples grupos de interés. El gobierno municipal llevó a cabo una serie de consultas con los residentes y usuarios del núcleo de la ciudad e identificó sus preocupaciones fundamentales en torno al tema, y recogió sus principales recomendaciones para proyectos de revitalización. Se espera que el resultado sea un centro de la ciudad cuya calidad ambiental invite a la gente a vivir allí.





intensivos para mejorar los servicios ambientales y las zonas verdes.

Las CT aprobadas en 2003 en esta área —10 operaciones en siete países— excedieron los US\$2,1 millones. Algunas de ellas (en Belice y Ecuador) se enfocan en prestar apoyo nacional a las entidades locales para el manejo de desechos sólidos. La recolección y disposición final de desechos es un problema crítico en países como Ecuador, donde sólo el 56% de los habitantes de la ciudad tiene acceso a servicios de recolección y donde sólo el 26% de los desechos se vierte en rellenos sanitarios. El Banco aprobó una cooperación técnica a través de la cual se otorgan fondos al gobierno nacional para que desarrolle un plan de manejo integrado de desechos dirigido a municipios urbanos pequeños y medianos. Las otras operaciones aprobadas este año forman parte de un conjunto de actividades de gestión ambiental urbana que apuntan a apoyar iniciativas locales de planificación y gestión en centros urbanos claves (San Salvador, Managua y La Paz). De este modo se cubre una amplia variedad de temas e interrelaciones que se producen en el entorno urbano como son la tierra, la infraestructura y la calidad del medio ambiente.

Diseño de marcos ambientales estratégicos para un desarrollo sostenible

El Banco continúa apoyando las actividades de los gobiernos relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades de las agencias ambientales, el desarrollo de legislación ambiental, la aplicación de un amplio rango de instrumentos de manejo, y la introducción de medidas de supervisión y vigilancia ambiental. En 2003 se aprobaron tres cooperaciones técnicas en el área de gestión ambiental

estratégica que representan tres nichos claros de actividad: apoyo a la elaboración de estrategias nacionales de medio ambiente que contengan enfoques innovadores de manera que el apoyo prestado a los ministerios sea más efectivo; marcos ambientales estratégicos y planes de acción en el ámbito subnacional, que en la región son débiles y bastante inefectivos y así se reconoce; y evaluaciones ambientales estratégicas para grandes proyectos de infraestructura, un área cada vez más crítica y de gran visibilidad en las agendas nacionales y regionales de integración.

En el ámbito nacional, el Banco aprobó una CT para que Costa Rica desarrolle una estrategia de medio ambiente a través de un proceso altamente participativo dirigido a: identificar prioridades y criterios de sostenibilidad; definir líneas de actividad estratégicas; proponer los esquemas institucionales, instrumentos de gestión e indicadores de desempeño correctos; y forjar acuerdos en torno al Plan de Acción. Más adelante en la estrategia se establece un “esquema de reingeniería” para el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual implica la redefinición de sus funciones, la creación de una unidad estratégica de medio ambiente, la adopción de una metodología SEA y el diseño de un sistema de gestión de información en apoyo a la toma de decisiones para mejorar la evaluación y supervisión. El último paso en esta cooperación técnica es el desarrollo de un Plan de Acción para poner a funcionar todos los nuevos programas ministeriales y para guiar la agenda nacional de medio ambiente.

En apoyo a los nuevos enfoques subnacionales de gestión ambiental, el Banco aprobó una CT sobre gobernabilidad ambiental global financiada por



el Programa Alianza BID y Países Bajos para el Medio Ambiente (NPPE por sus siglas en inglés). Por medio de esta operación regional se establecerá un marco estratégico de gestión ambiental para ciudades intermedias de la región, con intervenciones específicas en cinco municipios: Juiz de Fora en Brasil, Estelí en Nicaragua, San Pedro Sula en Honduras, y Esmeraldas y Quito en Ecuador. El apoyo a las ciudades seleccionadas incluye el desarrollo de marcos estratégicos, planes de acción y diseño de instrumentos de gestión que respondan a las necesidades de cada municipio. En este esfuerzo se considera crítica la adopción de un enfoque sólido de planificación participativa que involucre a múltiples grupos de interés y un fuerte compromiso de las autoridades locales.

Por último, el Banco está apoyando la realización de evaluaciones ambientales estratégicas para proyectos de corredores,

como por ejemplo el Corredor Norte de Bolivia (Recuadro 4). Debido a su tamaño y complejidad, y a que se trata de iniciativas delicadas desde el punto de vista social y ambiental, estos proyectos requieren de una SEA para asegurar su sostenibilidad. La SEA implica realizar consultas con varios grupos de interés y se usa como herramienta para anticipar posibles problemas, de modo que se pueda tanto prevenir los impactos negativos de los programas más grandes, como aprovechar al máximo sus aspectos positivos.

Reducir el riesgo de desastres y mejorar la seguridad de tenencia de la tierra para los pobres

Desde 1990, el BID ha proporcionado asistencia financiera a América Latina y el Caribe destinada a esfuerzos de recuperación y reconstrucción posteriores

Recuadro 4. Cómo anticipar los impactos de una propuesta vial

Las vías regionales pueden traer desarrollo económico a una zona y al mismo tiempo causar impactos ambientales significativos. Por ello no se debe suponer que sus efectos van a ser solamente locales, cuando en realidad será necesario considerar toda el área involucrada antes de iniciar las obras.

En Bolivia, el gobierno está planeando modernizar y completar la autopista Víctor Paz Estenssoro en el Corredor Norte. Esta carretera conectará eventualmente la región del Mato Grosso de Brasil y Perú en el norte, con Argentina en el sur, además de conectar las capitales departamentales de La Paz, Beni, Pando, Oruro y Tarija. A principios de 2003 se aprobó una CT por US\$1.000.000 para realizar una SEA que cubra los 1.300 kilómetros del Corredor Norte, y una evaluación detallada de impacto ambiental para un nuevo tramo de la carretera que va de Santa Bárbara a Bellavista, que muy pronto pasará a formar parte de los proyectos de Bolivia que están siendo procesados por el BID. A través de esta iniciativa se busca recolectar información de antecedentes sobre el área, establecer los efectos potenciales sociales y ambientales tanto en la zona de impacto directo como en la de influencia indirecta. Para ello se identificarán las áreas más delicadas y susceptibles a sufrir daños, así como los programas de gestión ambiental requeridos antes de comenzar la construcción, con el propósito de sugerir alternativas para minimizar los impactos, como por ejemplo desviar la carretera, concederle estatus de reservas naturales a aquellas áreas sensibles o de importancia ecológica, e impartir capacitación tecnológica.

Un proyecto tan complejo y de un rango tan amplio como éste requiere un profundo conocimiento del área y sus comunidades, una comunicación efectiva con todos los grupos de interés de la región y conocimiento de las interrelaciones ecológicas entre ecosistemas diversos y complejos, e interacción con las autoridades locales. Al poner todos estos aspectos bajo una SEA se obtendrá un panorama más completo y útil del impacto de aquello que a primera vista puede parecer una tarea simple: construir una autopista.



a los desastres naturales. Con el fin de mejorar la respuesta inmediata del Banco a futuras emergencias, y sobre todo para restaurar servicios básicos esenciales (electricidad, agua y saneamiento, vivienda y transporte), en mayo de 2003 el Directorio aprobó la creación de la Facilidad de Respuesta Inmediata. Una versión preliminar de la misma había sido utilizada desde 1999 para financiar ocho proyectos de emergencia.

Afortunadamente en 2003 no ocurrió ningún desastre de gran magnitud, como huracanes, terremotos, o las inundaciones y desprendimientos de tierra ocasionados por El Niño y otros sucesos catastróficos en años anteriores. Con todo, varios países tuvieron que hacer frente a fenómenos naturales de mediano impacto. En ese sentido se aprobaron, por ejemplo, varias CT de ayuda de emergencia a Bolivia, después de los fuertes aguaceros que afectaron la infraestructura de transporte y a algunas comunidades.

Los países también están interesados en recibir apoyo para obtener protección financiera y para inversiones de prevención y mitigación. En El Salvador, a través de una CT se impulsó el desarrollo de una estrategia de gestión de riesgos financieros que vincula a varias instituciones nacionales, con la cual se mejora la capacidad de país para planificar sus respuestas ante sucesos catastróficos.

En 2003, el equipo responsable de una CT aprobada el año anterior sobre prevención de desastres y manejo de riesgos en municipios centroamericanos recibió una mención de honor como el más destacado del Banco. La CT consistió en identificar las mejores prácticas, diseñar y producir un paquete de información audiovisual e impresa, impartir capacitación intensiva para las autori-

dades municipales (más de 500 alcaldes de Centroamérica y su personal técnico) y realizar una campaña de medios masivos a través de la televisión, radio y prensa escrita que llegó a miles de comunidades y millones de personas. A través de este programa se logró una mayor utilización de las herramientas suministradas por parte de las asociaciones de municipios y las organizaciones de prevención de desastres de Centroamérica, con lo cual se asegura una difusión apropiada tanto de estos instrumentos como del mensaje sobre la importancia de la prevención.

El 2003 fue el segundo año del Plan de Acción para Desastres Naturales. Éste comprende un conjunto de programas institucionales, técnicos y financieros para reducir vulnerabilidades, entre los cuales figura la adopción de sistemas de prevención y mitigación de desastres.

Uno de los factores claves de la vulnerabilidad de los pobres es la falta de seguridad de tenencia de la tierra, lo cual tiene claras repercusiones sobre la apropiación y gestión de los recursos naturales. La seguridad sobre la propiedad de la tierra por lo general produce una variedad de impactos económicos, sociales y ambientales positivos, entre ellos un mayor acceso por parte de los productores a los mercados de crédito y tierras, a niveles más elevados de inversión en programas de conservación de recursos naturales, y a incentivos para actividades de protección y conservación de recursos, cuando existen pruebas sobre procesos de regularización o sobre la posesión de títulos legales. El Banco continúa apoyando programas de regularización de tierras con el fin de facilitar y garantizar oportunidades de inversión en sectores productivos. Tal es el caso de un



programa recientemente aprobado de regularización de tierras en Bolivia por US\$22 millones. Este préstamo ha sido complementado con fondos de una CT aprobada en 2003 para elaborar planes provinciales orientados a abordar simultáneamente programas de titulación de tierras y saneamiento, ligando así los esfuerzos del país en materia de regularización de tierras con el suministro de servicios a las comunidades.

TRABAJO CON EL SECTOR PRIVADO

El BID reconoce la importancia de trabajar mancomunadamente con bancos comerciales, inversionistas institucionales y otros prestamistas para movilizar financiación privada destinada a infraestructura y desarrollo de mercado de capitales. El Departamento del Sector Privado (PRI por sus siglas en inglés) fue creado en 1995 precisamente para cumplir con esa misión. Su Unidad Ambiental y Social revisa y evalúa la viabilidad de los proyectos que se someten a consideración del PRI y supervisa los aspectos sociales y ambientales de los proyectos del Departamento. El PRI no solamente ayuda a las compañías

a abordar y a manejar correctamente los aspectos ambientales, sociales y de salud y seguridad de los proyectos. Su participación también produce beneficios adicionales sustanciales para el prestatario o los patrocinadores y otros inversionistas de los proyectos, además de que mejora la protección de recursos sociales y ambientales.

La participación del BID también conlleva mejoras para aquellos proyectos que no son financiados directamente por la institución. Esto se debe a la mayor capacidad que se ha desarrollado en el sector privado (trátese de patrocinadores, bancos comerciales u otros) y en agencias gubernamentales a través de la experiencia acumulada en los proyectos que financia. En 2003 el PRI aprobó dos préstamos ambientales significativos, uno en Chile y otro en Perú. La planta de desalinización de Antofagasta (US\$7 millones en recursos del Banco y financiación adicional del sector privado) constituye una nueva fuente de agua para satisfacer la demanda futura en la región árida de Chile (Recuadro 5).

La participación del Banco en el proyecto del gasoducto Camisea en Perú ha contribuido a reducir los riesgos ambientales

Recuadro 5. La desalinización como medio para incrementar el abastecimiento de agua

El Departamento del Sector Privado aprobó un proyecto en Antofagasta, Chile, para diseñar, construir y operar una planta de desalinización, lo cual incluye la tubería de entrada y una línea de suministro de 11 kilómetros de longitud. Antofagasta, localizada en el desierto de Atacama, no tiene pluviosidad medible, y el agua de que dispone actualmente se trae desde los Andes a través de una tubería de 400 kilómetros que atraviesa el desierto. La planta de desalinización se construirá hasta en cuatro etapas modulares según el crecimiento de la demanda de agua en la región. La primera etapa incluye la maquinaria de procesamiento necesaria para una capacidad inicial de 13.000 metros cúbicos al día, que cuando finalice la fase inicial habrá ascendido a 52.000 metros cúbicos diarios. El BID está proporcionando apoyo financiero para cubrir la primera etapa y la primera fase de expansión del proyecto. Su significado en términos de desarrollo es muy importante en la medida en que abastecerá a la ciudad de Antofagasta y a la región con una fuente adicional y crítica de agua potable para satisfacer las necesidades de una población cada vez más numerosa hasta el año 2020. El proyecto también servirá como modelo de demostración de aplicación a gran escala de la tecnología desalinización por ósmosis inversa en esta región árida.



y sociales de una obra grande y compleja que se construye a través de un esfuerzo colaborativo entre los sectores público y privado. El BID llevó a cabo análisis de riesgo y factibilidad económica y social para abordar los tres componentes del proyecto: los yacimientos y plantas de gas, los gasoductos y la distribución de gas en Lima. Este enfoque, adoptado por el equipo del Banco desde un principio, refleja las buenas prácticas empleadas por las instituciones financieras multilaterales en materia de EIA. El Banco también actuó como agente catalítico en la nueva colaboración entre el gobierno del Perú, las autoridades locales y las organizaciones indígenas, a través de la cual se pretende formular un marco de desarrollo común y coherente para realizar actividades conjuntas. Este marco se articuló a través de un Programa de Fortalecimiento Institucional aprobado en 2002, a través del cual se busca fortalecer las capacidades del gobierno para abordar los impactos indirectos de largo plazo del proyecto Camisea, introducir nuevos mecanismos de supervisión y cumplimiento ambiental, establecer áreas protegidas en zonas claves del proyecto, y brindar la oportunidad a las comunidades de que supervisen las medidas de mitigación social y ambiental.

Mediante un acuerdo de cooperación técnica, el PRI aprobó un proyecto para estructurar esquemas de cogeneración a base de biomasa. La meta es desarrollar los términos y condiciones comerciales y técnicos para financiar ingenios azucareros vía instalaciones de cogeneración, lo cual producirá vapor para los procesos de producción del ingenio y electricidad que puede ser vendida de nuevo a la red eléctrica. Se espera que el proyecto tenga efectos ambientales positivos

como, por ejemplo, la reducción de emisiones de carbono y menos consumo de combustibles fósiles por parte de la red eléctrica local para generar electricidad. Se espera que las instalaciones de cogeneración produzcan beneficios económicos en el mercado internacional emergente de créditos ecológicos, conocidos comúnmente como "créditos de carbono". Esta cooperación técnica está siendo financiada por los Fondos Hemisféricos de Energía y Transporte Sostenibles (FHET) del BID.

En 2003, el PRI otorgó dos CT directamente relacionadas con el medio ambiente. El proyecto titulado "Marco para incorporar riesgos sociales y ambientales en los análisis tradicionales de crédito", con recursos del NPPE, incluye un sistema para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales de carácter ambiental, social y de salud y seguridad asociados con la ejecución de grandes obras de infraestructura en América Latina y el Caribe. Este marco le sirve no solamente al Banco sino a las compañías privadas y a las instituciones financieras de toda la región para garantizar que los proyectos de desarrollo sean ambiental y socialmente sostenibles.

EDE Sur (Empresa de Distribución de Energía del Sur) y EDE Norte (Empresa de Distribución de Energía del Norte) son dos compañías dominicanas privadas de distribución eléctrica que reciben financiación del BID. Una CT sobre gestión eléctrica orientada por la demanda (que también cuenta con recursos de los FHET) aborda el uso final de electricidad en el área de concesión de las compañías de distribución por parte de consumidores en los sectores industrial, residencial, comercial y público. El programa incorpora la promoción del uso eficiente de



electricidad por parte de los usuarios, lo cual incluye mejores equipos.

Entre las contribuciones realizadas por el Banco en 2003 para la búsqueda de soluciones ambientales figura un seminario para armonizar los requisitos de varias instituciones financieras internacionales para supervisar las emisiones en plantas de energía térmica. En respuesta a la demanda crítica de apoyo técnico, la Unidad Ambiental y Social del PRI diseñó un modelo de gestión de riesgos sociales y ambientales para operaciones de préstamo a compañías privadas, así como procedimientos innovadores de auditoría social para abordar asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico Caña Brava en Brasil.

TRABAJO CON LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Banco está activamente comprometido con la pequeña y mediana empresa en América Latina y el Caribe. Dentro del Grupo BID, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) es el responsable de hacerlo. El FOMIN fue concebido como un nuevo mecanismo de asistencia técnica para estimular la innovación y trascender los instrumentos existentes de asistencia bilateral e internacional en la región. Los proyectos del FOMIN se centran en ensayar nuevos enfoques de desarrollo y en fomentar un crecimiento económico inclusivo. El objetivo fundamental es utilizar tanto donaciones como inversiones para demostrar nuevas formas de desarrollar la pequeña y mediana empresa, capacitar a los trabajadores, fortalecer la gestión ambiental y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y de otro tipo.

Durante los últimos años, el FOMIN ha

hecho hincapié en el uso de grupos de proyectos (*clusters*) como herramienta promisorio de desarrollo (un *cluster* es un grupo de 6 a 12 proyectos en un área temática específica que serán desarrollados, apoyados y evaluados de manera conjunta). En el campo ambiental existe el llamado *cluster* de Ecoeficiencia a través de Producción más Limpia y Gestión Ambiental. Por ecoeficiencia se entiende "la práctica de mejorar la productividad a través de una utilización más eficiente de insumos tales como materias primas y energía, al tiempo que se reducen paulatinamente los impactos ecológicos y la intensidad del uso de recursos". El FOMIN está ayudando a las Pyme de la región a mejorar su eficiencia mediante el uso de métodos de producción más limpia. En 2003 aprobó proyectos de producción limpia en Nicaragua y Costa Rica, y otros dos proyectos en México. Como se señaló más arriba, el FOMIN también está respaldando una novedosa iniciativa en Costa Rica orientada a lograr que se adopten métodos de producción limpia en toda la cadena de producción.

El Banco también trabaja en el área de responsabilidad social empresarial (RSE). Tal como se describió en la sección sobre *Nuevas operaciones ambientales*, la popularidad cada vez mayor de la RSE en todo el mundo está ejerciendo presión en las compañías de la región para que adopten estos conceptos si quieren competir en forma efectiva. El FOMIN aprobó una donación que se destinará a promover el concepto de RSE en toda la región. Asimismo aprobó un proyecto en Chile a través del cual se busca implantar medidas de RSE en empresas pequeñas y medianas (Recuadro 6). Como parte de los esfuerzos del Banco en este nuevo campo, en septiembre de 2003 se realizó



una conferencia en Panamá sobre RSE como herramienta de competitividad. Durante el evento las empresas pequeñas y medianas pudieron intercambiar experiencias sobre la manera de aplicar los fundamentos de la RSE.

A medida que aumenta el número de proyectos ambientales en la cartera del FOMIN se están haciendo mayores esfuerzos para identificar las enseñanzas y las mejores prácticas extraídas de la experiencia en un área como la de la producción limpia, que es relativamente nueva. Lo anterior ayudará a fortalecer las alianzas entre el FOMIN y las agencias ejecutoras, así como su función como fuente importante de información y experiencia sobre asuntos atinentes al desarrollo del sector privado en la región.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES AMBIENTALES EN LA REGIÓN

El BID ofrece conocimientos especializados y experiencia en numerosos

aspectos ambientales. Asimismo se propone desarrollar las capacidades de los gobiernos para abordar sus prioridades ambientales. Trabaja en pro de mejorar la cooperación y el diálogo entre los gobiernos, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y otros grupos de interés en la región. También ayuda a los gobiernos en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones adquiridas bajo los tratados y convenios internacionales sobre medio ambiente.

Desarrollo de conocimientos e innovación

El Banco continúa generando y difundiendo información e innovaciones que tienen un impacto tanto dentro de la institución como en toda la región. En un intento por mejorar la supervisión y evaluación, y por medir el desempeño ambiental, el BID ha desarrollado nuevos esquemas de indicadores de impacto de gestión de recursos naturales. También concluyó el diseño de un sistema electrónico que permitirá que su personal tenga acceso eficiente

Recuadro 6. Prácticas de responsabilidad social empresarial a la medida de la pequeña y mediana empresa

Tanto el acuerdo de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, como uno más reciente entre el país austral y Estados Unidos, contienen disposiciones especiales con respecto a condiciones laborales y desempeño ambiental. Tales condicionamientos han aumentado la presión sobre las compañías chilenas para que incorporen medidas social y ambientalmente responsables con el fin de preservar su acceso a los mercados. En diciembre de 2003, el FOMIN aprobó US\$1,25 millones en recursos no reembolsables para ayudar a las empresas pequeñas y medianas a adoptar medidas de responsabilidad social.

La agencia ejecutora, el centro Vincular adscrito a la Universidad Católica de Valparaíso, tienen una respetable trayectoria de trabajo con grandes empresas en lo que se refiere a definir e implantar estrategias de RSC. Se espera que a través del proyecto se pueda aprovechar esta experiencia y transferirla a empresas más pequeñas. Son varios los sectores de actividad en el país que están interesados en participar, entre ellos la industria vitivinícola, la manufacturera y el sector frutícola, todos los cuales buscan oportunidades de exportación. La meta es implementar medidas de RSC al menos en 150 Pyme y desarrollar capacidades en los proveedores locales de servicios especializados en la implantación de RSE en pequeñas empresas, con el fin de garantizar su sostenibilidad.

Dado que la RSE es algo todavía relativamente nuevo en el país, el apoyo del FOMIN tendrá un impacto significativo en lo que se refiere a acelerar el uso de esta herramienta para consolidar la competitividad de las empresas. Uno de los aspectos innovadores importantes de este proyecto es el desarrollo de indicadores de RSC diseñados a la medida de las empresas pequeñas, lo cual contribuirá a hacer de la RSC un instrumento útil y que tenga sentido desde el punto de vista de los negocios.



a información ambiental esencial. Para mejorar el desempeño ambiental dentro del Banco, sirvió de anfitrión de la tercera reunión anual de un grupo de trabajo de los BMD sobre adquisiciones ambientalmente responsables y apoyó esfuerzos internos para promover la responsabilidad ambiental.

Para apoyar la labor del BID en la región, la División de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS/ENV) coordina y administra dos esfuerzos colaborativos clave que aportan conocimientos sobre prioridades y soluciones ambientales: el Programa Alianza BID y Países Bajos para el Medio Ambiente (NPPE por sus siglas en inglés) y el Fondo Asociación BID y Países Bajos para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (INWAP por sus siglas en inglés). El NPPE fue establecido con el objetivo general de proteger y mejorar el medio ambiente en América Latina y el Caribe en lo que hace a gestión y herramientas innovadoras, gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), cambio climático (mitigación y adaptación), y biodiversidad y bosques. A partir de mayo de 2001 se han canalizado US\$2 millones al año hacia diversas actividades y CT, y se le ha dado mayor dinamismo a la agenda ambiental en las divisiones operativas. Entre los productos financiados bajo el NPPE en 2003 figuran análisis ambientales de país, mecanismos de GIRH, gestión ambiental urbana, diagnóstico de oportunidades relacionadas con la mitigación de gases con efecto de invernadero, instrumentos para el manejo regional de la biodiversidad, y mecanismos de conservación ambientalmente sostenibles.

INWAP se estableció en agosto de 2002 con el objetivo general de apoyar la implantación de principios internacionales

mente reconocidos en la gestión integrada de recursos hídricos en América Latina y el Caribe. Su impacto es doble: por un lado mejorará y fortalecerá la capacidad operacional del Banco en la GIRH, al tiempo que reforzará la capacidad de los países prestatarios en esta área. Entre las líneas de actividad bajo las cuales opera INWAP figuran la promoción de enfoques innovadores e integrados para la gestión de recursos hídricos, el fomento de actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional, la promoción de actividades que contribuyan al crecimiento económico sostenible y a la reducción de la pobreza. Igualmente se hace un énfasis especial en desarrollo de destrezas y capacitación para el personal del Banco y para los países prestatarios. En 2003 el programa apoyó con estudios de buenas prácticas en organizaciones e instituciones de cuencas, caracterización de servicios de agua potable, diálogos sobre recursos hídricos y pobreza, y sobre recursos hídricos y gobernabilidad, evaluaciones de la aplicación de instrumentos económicos en el manejo de recursos hídricos, y capacitación.

Facilitación de diálogo y cooperación regionales

En 2003 se dieron varios pasos importantes hacia una mejor coopera-





ción regional. El Banco estableció mecanismos formales de coordinación con los BMD, por ejemplo en torno al desarrollo de análisis ambientales de país con el fin de sintonizar las metodologías y hacer esfuerzos conjuntos para aumentar eficiencias. Entre otros esfuerzos, para armonizar los procesos ambientales y bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Evaluaciones de Impacto, el Banco estableció contactos con otras organizaciones internacionales para mejorar el uso de EIA. Asimismo colaboró con los gobiernos de América Central para que identifiquen sus necesidades de desarrollo de capacidades en el campo de la integración económica y la liberalización del comercio.

El Banco continúa participando en el Comité Técnico Interagencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente. En 2003 ofreció apoyo en una variedad de actividades que se insertan dentro del Plan de Acción regional 2002-2005 acordado por los gobiernos. SDS/ENV preparó documentos en colaboración sobre comercio y medio ambiente, indicadores de información ambiental, energía renovable, cambio climático, recursos hídricos, medio ambiente urbano y asentamientos humanos. Igualmente el Departamento coordinó y preparó la sección de sostenibilidad ambiental sobre el BID y los Objetivos e Desarrollo del Milenio (ODM) para una reunión internacional que se llevó a cabo en Brasilia en noviembre.

El Diálogo Regional de Políticas es una iniciativa del Departamento de Integración que recibe apoyo técnico de SDS/ENV. Su objetivo es crear una red de funcionarios gubernamentales latinoamericanos y caribeños a nivel viceministerial responsables por la toma de decisiones y el diseño de políticas ambientales. Durante la reunión de

esta red ambiental en febrero de 2003, los participantes analizaron la aplicación de instrumentos económicos en la gestión ambiental. Se prepararon estudios sobre instrumentos económicos para manejo de desechos sólidos y de recursos hídricos, junto con estudios de caso de Brasil, Chile, México y Colombia, y en diciembre se publicaron dos manuales con los resultados de estos estudios. Durante la segunda mitad de 2003, y en preparación de la reunión de la red en marzo de 2004, se condujeron estudios sobre valorización económica del manejo sostenible de recursos costeros (el Caribe) y sobre manejo de la calidad del aire en Brasil, Chile y México.

El Banco continúa participando en numerosas actividades en el área de manejo de desastres naturales. Contribuyó a la preparación del Plan Estratégico para la Reducción de Desastres y Gestión de Riesgos para la región que fue presentado al Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos en mayo de 2003. Asimismo publicó un libro sobre manejo de riesgos de desastres y estrategias financieras de reconstrucción. Como parte de otra iniciativa del Diálogo Regional de Política, para la tercera reunión de la Red de Desastres Naturales realizada en marzo de 2003 se publicó un análisis detallado de los sistemas





locales para manejar sucesos catastróficos que trata los temas relativos a estructuras organizacionales, fortalecimiento institucional, financiamiento e indicadores de desastres. Durante el año se realizaron varios seminarios sobre: desastres como consecuencia de conflictos sociales, terrorismo y accidentes industriales; adaptación al cambio climático y manejo de riesgos de desastres en Asia y el Caribe; y la incorporación de análisis de riesgo de desastres en el ciclo de proyectos del Banco. La División de Medio Ambiente y los Departamentos Regionales de Operaciones también apoyaron la revisión de la Política de Desastres del BID.

Ayuda a los países para cumplir con los convenios globales y aprovechar sus oportunidades

Como parte de su apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático, la División de Medio Ambiente actuó como anfitriona de la reunión que sostuvieron los BMD y la Secretaría del Convenio Marco sobre Cambio Climático, e inició una evaluación regional sobre necesidades relacionadas con la mitigación de GHG. En su calidad de punto focal del Banco con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), SDS/ENV suministró asistencia técnica a los Departamentos Regionales de Operaciones en el diseño de varias operaciones durante 2003.

En 2003 el Banco pudo por primera vez presentar directamente propuestas a consideración del GEF. Durante el año el BID logró aprobación del GEF para su primer proyecto completo (a realizarse en las Islas de la Bahía en Honduras). También se formularon iniciativas para ayudar a las comunidades indígenas de

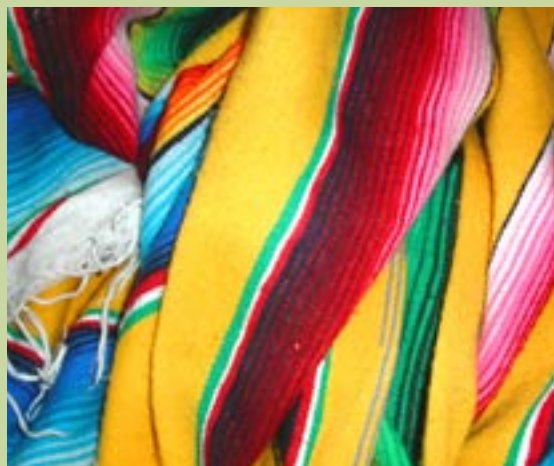
Centroamérica a que manejen mejor los ecosistemas, y se realizaron actividades adicionales para proteger el golfo de Honduras y las zonas costeras de Jamaica. En preparación para el procesamiento por parte del GEF de un mayor número de propuestas del BID, SDS/ENV y otros departamentos trabajaron durante 2003 en los procesos internos de revisión y gestión financiera de proyectos.

CÓMO GARANTIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS

Análisis sociales y ambientales

El BID se ha comprometido a asegurar que los riesgos ambientales que conllevan los proyectos que apoya sean minimizados. Una de las herramientas que emplea para lograrlo es el Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI por sus siglas en inglés). El CESI es un comité interdepartamental que analiza la viabilidad social y ambiental de todos los préstamos y de la mayor parte de las cooperaciones técnicas que el Banco procesa. El 2003 el CESI analizó 307 operaciones durante 46 reuniones, lo cual representa un aumento del 26% con respecto a 2002. De este





total, el 47% de las operaciones fueron préstamos y el otro 35% cooperaciones técnicas, lo cual representa un leve incremento en la participación de los créditos con respecto al año anterior.

Las cooperaciones técnicas se analizan al nivel de perfil a través de un procedimiento simplificado en un diálogo virtual entre los analista del CESI y el equipo de proyecto. Los planes de operaciones no se analizan formalmente a no ser que se esperen impactos ambientales negativos significativos.

Los préstamos también se analizan al nivel de perfil. Dependiendo de sus impactos potenciales se podrán examinar una segunda vez sea mediante una verificación de la Secretaría del CESI o más formalmente durante una segunda reunión del Comité. Los proyectos que requieran una evaluación de impacto ambiental serán por lo general analizados por el CESI una segunda vez. El proceso de verificación realizado por la Secretaría se introdujo como parte de la actualización de los procedimientos del CESI que tuvo lugar en 2002; éste consiste en que el equipo de la Secretaría verifica que las recomendaciones del CESI hayan sido integradas al documento de proyecto. En 2003, un 30% de las operaciones fueron sometidas a este tipo de verificación

El 78% del total de operaciones analizadas no requirieron ninguna clase de estudios ambientales y/o sociales. Treinta y ocho de ellas (12%) exigieron análisis ambientales, 19 (6%) necesitaron una EIA, y otras 4 (1%) requirieron una evaluación ambiental estratégica. Otras 6 operaciones (2%) demandaron otro tipo de estudio una vez revisadas (como por ejemplo análisis de riesgo y factibilidad ambiental).

Orientación ambiental para los equipos de proyecto

El año anterior fue también un período dedicado a consolidar el apoyo que el CESI ofrece a la preparación de los documentos de orientación ambiental y al desarrollo de capacitación en materia de EIA. SDS/ENV continua administrando el CESI y guiando al Banco en temas de evaluación ambiental. A fines de 2003 se concluyó un curso de capacitación a través de Internet diseñado para proporcionar a los estudiosos del medio ambiente en la región conocimiento gratis e interactivo sobre EIA en inglés y en español.

La División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Departamento de Desarrollo Sostenible (SDS/MSM) formuló en 2003 lineamientos específicos para análisis de riesgo y factibilidad ambiental de operaciones relacionadas con la microempresa que fueron examinados por los miembros del CESI. Paralelamente, SDS/ENV comenzó a formular para el Banco las orientaciones pertinentes a la realización de evaluaciones ambientales estratégicas, una actividad que también contó con el apoyo de miembros del CESI, y que concluirá en 2004.





El acarreo de agua es una tarea que consume buena parte del tiempo de las mujeres y los niños de Chinameca, un municipio localizado en el departamento de San Miguel, en El Salvador. Chinameca tienen una población de aproximadamente 23.000 habitantes, la mitad de los cuales vive en áreas rurales. Sólo nueve de las 19 comunidades de este municipio tienen acceso a servicios de agua potable. Las demás deben resignarse a consumir el agua de mala calidad que deber ser recogida y acarreada desde arroyos y acuíferos que frecuentemente se encuentran muy retirados de los pueblos. La calidad deficiente del agua y la falta de buenas prácticas de higiene agudizan la presencia de enfermedades transmitidas en el agua contribuyen a las elevadas tasas de mortalidad infantil. Esta es una realidad que confrontan actualmente miles de comunidades en toda América Latina y el Caribe.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: TEMAS Y RETOS

La preservación, conservación y suministro de agua para 525 millones de habitantes de América Latina y el Caribe sigue siendo un enorme desafío para el BID y para todos los gobiernos de la región. El agua de mala calidad ha tenido repercusiones sumamente adversas para la salud de la gente, pues ha causado enfermedades inducidas por el entorno como son las infecciones gastrointestinales que conducen a la muerte prematura de los niños y a pérdidas de productividad en

la población adulta, con su consecuente impacto directo en la economía de la región.

El séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en septiembre de 2000 se refiere a asegurar la sostenibilidad ambiental, mientras que la décima meta consiste en "reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento". Los estimados preliminares sobre las erogaciones que implica cumplir con esta meta en América Latina y el Caribe ascienden a US\$150.000 millones, lo cual significa que será necesario duplicar las inversiones en el sector en aquellos países que exhiben un lento crecimiento económico, niveles insostenibles de deuda pública y una participación cada vez menor del sector privado. Si los países mantienen sus niveles actuales de inversión no será posible cumplir los ODM. De aquí a 2015 será necesario incrementar la cobertura del servicio de agua potable en un 33% si se quiere cumplir con la meta fijada. En cuanto a los servicios de saneamiento, se debe aumentar la cobertura en un 35% para 2015.

La actividad crediticia en el sector de agua y saneamiento ha estado limitada por varios factores:

- tasas elevadas de urbanización;





- instituciones débiles y financieramente insostenibles, y un proceso débil de descentralización;
- políticas hídricas y marcos normativos débiles o inexistentes;
- resistencia política y social a las reformas y falta de compromiso de las partes involucradas; y
- limitaciones de orden fiscal.

La disponibilidad y la calidad del agua figuran entre las principales preocupaciones de la región desde una perspectiva social y ambiental, lo cual hace necesario buscar enfoques integrados para la gestión de los recursos hídricos. En América Latina y el Caribe se ha producido recientemente un cambio de paradigma en tal dirección. Es así como se ha pasado de una situación caracterizada por proyectos sectoriales de desarrollo de recursos hídricos con manejo centralizado hacia una gestión de recursos hídricos centrada en las cuencas hidrográficas y un manejo adecuado de las subcuencas en que el agua se utiliza como elemento integrador.

A principios de 1990, las instituciones multilaterales comenzaron a financiar proyectos de gestión de cuencas que se concentraban en proteger las grandes

inversiones de energía hidroeléctrica cuya vida económica se encontraba en peligro debido a la erosión y sedimentación aceleradas en las cuencas circunvecinas. Las intervenciones se centraban en medidas de conservación de suelos para detener o desacelerar la degradación.

Hacia finales de los años noventa se comenzó a aceptar cada vez más que las actividades humanas pueden convertirse en un factor tan significativo como la propia erosión natural, y por ello los aspectos socioeconómicos de las intervenciones se volvieron más relevantes. Los esfuerzos se concentraron entonces en la relación que existe entre las pérdidas de suelos y los rendimientos de las cosechas, y en la utilización de medidas de conservación de suelos por parte de los agricultores. La gestión de recursos naturales, la diversificación de cultivos, la conservación de suelos y el manejo de bosques se convirtieron en elementos esenciales de los programas de gestión de cuencas. La protección de las inversiones en energía hidroeléctrica todavía se tiene en cuenta, pero las actividades en finca han logrado una mayor prominencia. Estas acciones están diseñadas para mejorar las fuentes de sustento de

Indicadores seleccionados de los problemas de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe

- Menos del 10% del agua que se extrae en la región es para uso doméstico.
- Mientras que el 86% de la población de América Latina y el Caribe tiene acceso a agua potable, sólo el 49% cuenta con servicios de alcantarillado.
- Se estima que 76 millones de personas (50 millones en las áreas rurales) no tienen acceso a agua potable y que 116 millones (66 millones en las áreas rurales) no cuentan con un buen servicio de alcantarillado.
- Un tercio de los habitantes tiene que usar letrinas y pozos sépticos.
- Del total de hogares que cuenta con conexión de agua, el 60% carece de servicio continuo.
- Sólo el 14% de los efluentes cloacales reciben alguna clase de tratamiento.



la población rural, con la esperanza de que las medidas que se apliquen en el ámbito de la finca contribuyan a la protección de los embalses.

Este nuevo enfoque conlleva una serie de retos:

- Existe una gran variedad de actividades y actores involucrados, por lo cual es necesario incorporar componentes de resolución de conflictos en el núcleo mismo del diseño del proyecto.
- Se requieren esquemas institucionales complejos; concentrarse en mejorar los medios de sustento de la población requiere de intervenciones diseñadas conjuntamente con las poblaciones locales.
- Es necesario definir con cuidado el tamaño del área de la cuenca, y se debe conocer bien el nivel de desarrollo y actividad económica que allí tiene lugar.
- La relación entre las actividades que se realizan aguas arriba y las que tienen lugar aguas abajo implica desafíos técnicos y requiere instrumentos sofisticados que puedan promover cambios de comportamiento en las poblaciones que habitan en la parte alta de la cuenca.
- Es necesario planificar actividades que sean sostenibles en el largo plazo, como por ejemplo la diversificación de cultivos, el aprovechamiento forestal y la creación de empleos fuera de la finca.

Los problemas del sector hídrico son complejos y van mucho más allá de la carencia de inversiones o la escasez de agua. América Latina es comparativamente rica en cuanto a sus recursos hídricos y cuenta

con ecosistemas muy diversos de agua dulce. Sin embargo, si se quiere tratar en forma efectiva los conflictos que surgen de las diversas necesidades, metas y aspiraciones de los varios grupos de interés, es necesario manejar en forma eficiente los factores biológicos, sociales, ambientales, económicos, financieros e institucionales involucrados en la administración de recursos hídricos.

Los marcos institucionales de la gobernabilidad de los recursos hídricos en la región varían sustancialmente de un país a otro. Salvo Argentina, Brasil y México, la mayoría de las naciones del área todavía se apoya en instituciones de carácter nacional para manejar sus recursos hídricos. Asimismo, la mayoría de tales instituciones dependen de otras entidades. Es común encontrarlas dentro de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e inclusive en los Ministerios de Obras Públicas. En materia de legislación, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador y México han propuesto leyes hídricas donde las cuencas hidrográficas figuran como la unidad básica de gestión de tales recursos.

La región cuenta con una amplia variedad de proveedores de servicios, usualmente autoridades locales y micro y pequeñas empresas, aunque están comenzando a tomar fuerza las asociaciones público-privadas para el abastecimiento de agua y saneamiento. Las organizaciones comunitarias también





están desempeñando un papel prominente, al tiempo que surgen grupos y asociaciones de usuarios para proveer tales servicios. Sin embargo, como se señaló más arriba, la cantidad de actores y partes involucradas dificulta los esfuerzos de coordinación. Por ello es importante promover el fortalecimiento institucional y las actividades de capacitación, así como fomentar la formulación de políticas que aborden los temas económicos, ambientales y sociales de manera integrada. Los gobiernos deben respaldar y auspiciar la participación de la sociedad civil para garantizar la aceptación de las políticas propuestas. Si se quiere que los mecanismos de gobernabilidad hídrica funcionen, entonces será necesario concebirlos de manera realista y teniendo en cuenta el entorno político, ambiental, social, económico y financiero en que se van a insertar.

Para hacer frente a estos retos, los responsables de la formulación de políticas y los administradores de recursos hídricos de la región han reconocido y aceptado la necesidad de diseñar un enfoque nuevo de amplio alcance para su manejo y que además esté en consonancia con lo dispuesto por varios convenios internacionales sobre gestión integrada de recursos hídricos. Es necesario implantar políticas y reformas institucionales equilibradas que promuevan la eficiencia de las fuerzas del mercado, al tiempo que fortalecen la capacidad de los gobiernos para desempeñar sus funciones adecuadamente. Lo ideal sería que este marco institucional se base en el reconocimiento de las relaciones entre los ecosistemas y las actividades socioeconómicas, y que apunte la formulación de políticas públicas en materia de normas, incentivos, planes de inversión pública, conservación y reutilización del agua, y

protección ambiental, así como los vínculos entre todos estos programas.

ACCIONES DEL BANCO EN RECURSOS HÍDRICOS

Desde sus inicios, el BID ha estado estrechamente involucrado en el sector hídrico, especialmente en lo que tiene que ver con proyectos de abastecimiento de agua, riego, energía hidroeléctrica y control de inundaciones. Cerca del 20% de la cartera total del Banco ha sido invertida en este sector. El BID ha invertido cerca de US\$3.800 millones en agua potable y saneamiento desde 1994, y ha asignado aproximadamente US\$2,7 millones en asistencia técnica no reembolsable para apoyar el fortalecimiento institucional de los proveedores de servicios y fomentar reformas legales





y normativas. En 2003, el Banco aprobó proyectos por US\$157 millones en Brasil, Chile y Guatemala (Recuadro 7) y varias operaciones de cooperación técnica en Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y Perú, cuyo monto asciende a cerca de US\$2,9 millones. Asimismo aprobó su primer proyecto de expansión del suministro de agua vía desalinización, como se describió más arriba. El monto de los proyectos para el sector que están siendo actualmente procesados por el Banco asciende a US\$1.700 millones. Se trata de iniciativas en Barbados, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago dirigidas a apoyar la expansión de la cobertura de servicios de saneamiento y el tratamiento adecuado de

efluentes municipales y domésticos.

El Banco ha preparado lineamientos operacionales para apoyar y mejorar el diseño de proyectos en este sector. Los Departamentos Regionales de Operaciones han formulado estrategias subregionales que apuntan a aumentar la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento; ayudar a los países a preparar planes nacionales de acción para que puedan cumplir los ODM; mejorar la calidad de los servicios mediante el fortalecimiento institucional de los proveedores y el desarrollo y consolidación de marcos normativos; y promover la sostenibilidad y eficiencia de largo plazo de los sistemas.

En 1998 el Banco aprobó su estrategia de Manejo Integrado de Recursos

Recuadro 7. Financiamiento de inversiones en agua potable y saneamiento para los pobres en áreas rurales

Aproximadamente el 60% de la población de Guatemala vive en áreas rurales. El sector de agua y saneamiento se caracteriza por su baja cobertura, mala calidad y por el deterioro de sus activos físicos. Se estima que unas 10.000 comunidades carecen de servicio de agua, y que la población rural sin acceso a agua potable se incrementa anualmente en 100.000 personas, de modo que para satisfacer esta demanda cada vez mayor se requiere un cambio radical en la manera como se diseñan los proyectos en las áreas rurales. El sistema actual de suministro de servicios en las zonas rurales enfrenta dos serias limitaciones: la implementación centralizada de proyectos, que limita la capacidad de los gobiernos para responder con prontitud a las necesidades de esas poblaciones, y la ausencia de participación comunitaria durante las etapas de diseño y ejecución de los proyectos, lo cual hace difícil concebir sistemas que sean compatibles con las capacidades técnicas y financieras disponibles.

Para ayudar al gobierno guatemalteco a cumplir su meta de aumentar la cobertura de los servicios de agua en un 60% en las áreas rurales, el Banco aprobó un préstamo por US\$50 millones en 2003. Estos fondos respaldarán el programa que beneficiará al menos a 500.000 consumidores rurales cuyo ingreso per cápita anual es muy inferior al promedio nacional. Esta iniciativa difiere sustancialmente de los enfoques empleados anteriormente para programas rurales de suministro de agua en Guatemala, en la medida en que promueve la participación comunitaria desde las etapas iniciales de la fase de ejecución. Asimismo apoya la creación de asociaciones comunitarias autónomas y legalmente constituidas cuyo propósito sea el suministro de servicios de agua y saneamiento. Estos grupos recibirán asistencia técnica para obtener su personería jurídica y para diseñar proyectos sostenibles de abastecimiento de agua potable que sean financiera y técnicamente sostenibles. El programa financiará los costos de capital de los proyectos mediante una combinación de fondos reembolsables y no reembolsables. Las comunidades repagarán los fondos reembolsables y cubrirán los costos de operación y mantenimiento del sistema mediante el cobro de tarifas de usuarios. Se establecerá un fondo rotatorio dentro de un fondo fiduciario en un banco comercial para depositar allí los recursos financieros reembolsados, que a su vez serán utilizados para financiar nuevos proyectos. Este novedoso mecanismo financiero ayudará al país a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Recuadro 8. Manejo de cuencas y gobernabilidad hídrica

El enfoque de gestión integrada de recursos hídricos que se sigue en América Latina y el Caribe ha creado la necesidad de manejar los recursos hídricos en el ámbito de la cuenca hidrográfica y las subcuencas. Las organizaciones en el ámbito de la cuenca forman parte de la estructuras organizacionales e institucionales que configuran la gobernabilidad hídrica y cumplen un papel fundamental en este proceso.

Son varios los países de la región que han creado organizaciones en el ámbito de la cuenca, pero hasta el momento esas experiencias no han sido compartidas ni documentadas. Es así como los países prestatarios miembros han solicitado un conjunto de lineamientos sobre la configuración de esos grupos, dada la demanda cada vez mayor de proyectos para poner en práctica una gestión integrada de los recursos hídricos. Por lo tanto, el Banco está asistiendo a los países en sus esfuerzos por mejorar la gobernabilidad del sector hídrico mediante la preparación de un estudio sobre tales organizaciones. Éste comenzará por realizar un análisis y evaluación de las estructuras administrativas existentes en países seleccionados. Luego se evaluará a las organizaciones para determinar su grado de desarrollo, sus bases jurídicas e institucionales y los motivos subyacentes que impulsaron su creación, así como sus estructuras organizativas, el grado de participación de los diversos grupos de interés, los sistemas de referencia que se están empleando para evaluar su desempeño, sus fuentes y mecanismos de financiación, y sus instrumentos de recuperación financiera. A partir de allí se preparará un conjunto de lineamientos para orientar la creación, mejoramiento y operación sostenible de organizaciones en el ámbito de la cuenca.

Hídricos, a través de la cual propone un enfoque de gestión de cuenca para resolver los problemas relacionados con la gestión de recursos hídricos. En la estrategia se afirma que “se le debe asignar prioridad a los análisis y cambios institucionales ... por encima o en paralelo a la construcción de infraestructura” y se hace un llamado para que el BID “favorezca la iniciación de evaluaciones subregionales y/o nacionales en aquellas áreas y países donde se perciba en forma más evidente la necesidad de hacer cambios institucionales”. Por ello “el Banco asistirá a las naciones de América Latina y el Caribe en el desarrollo o mejoramiento de sus capacidades de la GIRH en todos aquellos niveles donde se toman decisiones y se realizan acciones”. Esto incluye apoyo para la creación de organizaciones de cuenca (Recuadro 8).

A partir de 1989 el Banco ha financiado más de 25 proyectos de gestión de cuencas y planea seguir haciéndolo en los años venideros. Estos proyectos apoyan esquemas institucionales y marcos jurídicos y normativos que promueven un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos. También hacen hincapié en la participación de las comunidades en las etapas de diseño y ejecución, con el fin de realizar

actividades sostenibles en lo ambiental, económico, social y financiero que fomenten la reducción de la pobreza y un crecimiento económico sostenible. En 2003, el Banco aprobó operaciones de cooperación técnica no reembolsables para el diseño de proyectos de gestión de cuencas en Costa Rica, Guatemala, la República Dominicana y Panamá.

En consonancia con las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible y del Tercer Foro Mundial del Agua, el Banco continuará ayudando a sus países miembros a preparar estrategias nacionales de GIRH, planes maestros, y marcos jurídicos, normativos e institucionales para promover un manejo integrado de los recursos hídricos. En 2003 se aprobó la primera operación de esta naturaleza en Costa Rica.



El Informe Anual de 2003 fue preparado por la División de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible bajo la dirección de Janine Ferretti, con la coordinación y contribuciones de David Wilk. Colaboraron igualmente Virginia Alzina, Kari Keipi, Helena Landázuri, Michele Lemay, Joseph Milewski, Robert Montgomery, Ricardo Quiroga, Diego Rodríguez, Daniel Shepherd y Michael Toman. La asistencia técnica fue suministrada por Ligia Espinosa y Rosario Ramírez de SDS/ENV, y por Luis Galván y Arlette Pedraglio de la Unidad de Fotos de EXR.

Diseño: Sushmita Mazumdar, Cardea Communications



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
1300 NEW YORK AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20577
WWW.IADB.ORG